

**UNA
VIOLENCIA
INDÓMITA
EL SIGLO XX
EUROPEO**



**JULIÁN
CASANOVA**

CRÍTICA

JULIÁN CASANOVA

UNA VIOLENCIA
INDÓMITA

El siglo xx europeo

CRÍTICA
BARCELONA

Primera edición: septiembre de 2020

Una violencia indómita. El siglo XX europeo
Julián Casanova

No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea este electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito del editor. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Art. 270 y siguientes del Código Penal).

Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita reproducir algún fragmento de esta obra. Puede contactar con CEDRO a través de la web www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47.

© Julián Casanova, 2020

© Editorial Planeta, S. A., 2020
Av. Diagonal, 662-664, 08034 Barcelona (España)
Crítica es un sello editorial de Editorial Planeta, S. A.

editorial@ed-critica.es
www.ed-critica.es

ISBN: 978-84-9199-217-2
Depósito legal: B. 7.331 - 2020
2020. Impreso y encuadernado en España por Black Print.

El papel utilizado para la impresión de este libro está calificado como papel ecológico y procede de bosques gestionados de manera sostenible.

1

Un mundo de privilegio, lujo y poder

Recuerdo un viaje en automóvil con amigos por algún lugar en Europa central en el verano de 1912. El conductor paró delante de un edificio pequeño y preguntamos por qué. «Es la frontera —respondió—. Tengo que mostrar la documentación del coche.» No recuerdo siquiera qué frontera era. En aquellos días toda Europa era nuestro patio de recreo.

(Duquesa di Sermoneta,
Sparkle Distant Worlds, Londres, 1947, p. 7)

El 16 de octubre de 1910 Luigi Lucheni fue encontrado muerto en su celda de la prisión de L'Evêché en Ginebra, ahorcado con su cinturón, o eso es lo que dijo la versión oficial. De mediana estatura y complexión fuerte, pelo negro rizado y ojos verdes grisáceos, Lucheni había asesinado doce años antes, el 10 de septiembre de 1898, a Isabel de Baviera, emperatriz de Austria, reina consorte de Hungría, esposa del emperador Francisco José.

Lucheni representaba bien al anarquista solitario que, sin pertenecer a ningún grupo o asociación obrera, estaba entonces hipnotizado por la idea de matar a esos opresores —miembros de la realeza o gobernantes— que vivían por encima del pueblo en palacios y hoteles de lujo. Entre los años 1892 y 1901, anarquistas como Lucheni asesinaron, además de a Isabel de Baviera, al presidente Sadi Carnot de Francia (1894), a Antonio Cánovas del Castillo, presidente del Gobierno de España (1897), al rey Humberto I de Italia (1900) y al presidente William McKinley de Estados Unidos (1901).

Lucheni tuvo el honor y la fama de acabar con la vida de la figura real más seductora de aquella época, dominada por monarquías unidas por lazos de sangre, apoyadas por aristocracias poderosas. Los aristócratas, como recordaba con nostalgia años después por ese mundo perdido la duquesa di Sermoneta, no tenían fronteras, viajaban donde querían y aunque muchos de ellos habían visto reducido por reformas y revoluciones parte del poder que tradicionalmente les había otorgado la posesión de la tierra, vivieron todavía, tras la muerte de la reina Victoria, el 22 de enero de 1901, unos años dorados, su «Indian summer», en expresión de Andrew Sinclair, antes de que su mundo se trastornara en 1914.¹

La persistencia del Antiguo Régimen

La reina de Gran Bretaña, coronada en 1837, había ocupado el trono durante 63 años y 7 meses. Victoria tuvo un funeral militar, como había solicitado en las instrucciones que dejó por escrito. Decenas de miles de marinos y soldados acompañaron su féretro hasta el lugar de su descanso final, el mausoleo de Frogmore, al lado de su querido príncipe Alberto. Al funeral, junto al nuevo rey, Eduardo VII, y el emperador alemán Guillermo II, nieto de la reina, asistieron un gran número de nobles extranjeros, casi todos unidos por lazos de sangre con Victoria.

Entre la gente de la realeza y la aristocracia la llamaban la abuela de Europa. Su amplia familia, de 9 hijos, 36 nietos y 37 bisnietos, estaba representada en casi todas las cortes europeas. Además del emperador alemán, cinco de sus nietas eran reinas consortes a comienzos del siglo xx: la zarina Alejandra de Rusia, la reina Victoria Eugenia de España, Maud de Noruega, Sofía de Grecia y María de Rumanía. Todas nacieron en ese mundo de privilegios, lujo y poder que persistía en Europa, pese a la modernización y los avances industriales. A diferencia del reinado de su abuela, de continuidad y estabilidad, todas ellas vivieron épocas de disturbios y tragedias a partir de 1914. Victoria Eugenia y Sofía murieron en el exilio. Alejandra fue brutalmente asesinada junto con su familia.²

Con la excepción de Francia, donde había surgido una República de la derrota de la guerra con Prusia en 1870, todos los grandes poderes europeos eran monarquías a comienzos del siglo xx. El republicanismo era, en casi todos esos Estados, un movimiento político radical bastante marginal y ser republicano era considerado en los imperios ruso y austro-húngaro revolucionario.

La idea de que la nobleza y la aristocracia habían iniciado desde la revolución francesa un declive y decadencia imparables, acosadas por el proceso de modernización y democratización liderado por la burguesía, fue cuestionada hace ya años por Arno Mayer. Se había menospreciado, según el historiador estadounidense, la capacidad de adaptación de las elites terratenientes a los contextos políticos cambiantes. Fueron más bien las burguesías emergentes, la clase media alta y los nuevos ricos, quienes experimentaron una aristocratización de sus estilos de vida. Y además los monarcas de toda Europa continuaron favoreciendo a las familias nobles en la concesión de los altos cargos.³

En Inglaterra, Francia o Alemania, por citar a las naciones más poderosas, una oligarquía de ricos y poderosos, de «buenas familias», de nobles y burgueses conectados a través de matrimonios y consejos de administración de empresas y bancos, mantenían su poder social a través del acceso a la educación y a las instituciones culturales.

Dinastías de aristócratas y burgueses que hicieron grandes fortunas en las décadas anteriores a la Primera Guerra Mundial estaban unidas por lazos de parentesco y sangre, a través de matrimonios perfectamente calculados para incrementar riquezas. Eso incluía en bastantes casos la búsqueda de mujeres americanas herederas de familias millonarias. En Inglaterra y Francia, príncipes, duques, marqueses, condes y barones buscaron millones y nueva sangre con matrimonios de conveniencia al otro lado del Atlántico.⁴

Además de los matrimonios, la práctica de la caza era también un importante vínculo internacional entre la aristocracia de las naciones europeas. Según Andrew Sinclair, «la mayoría de los hombres de Estado, monarcas, ministros y embajadores» se reunían en cacerías donde se hablaba de política, matrimonios y negocios. En esas casas de campo se tomaban en ocasiones decisiones más importantes que en la corte. Hay decenas de fotografías de la aristocracia, más hombres que mujeres, posando con las presas tras practicar su deporte favorito. Podían ser perdices, pero también rinocerontes, leones y elefantes en las lejanas colonias de África o Asia.⁵

La clase y el rango se distinguían por el vestido, las poses, la forma de hablar y el empleo de sirvientes y criados, algo muy común también en las clases medias altas que copiaban la forma de vida de la aristocracia. En 1901 los empleados en el servicio doméstico en Inglaterra eran el grupo más numeroso por ocupación. De los cuatro millones de mujeres asalariadas, un millón y medio trabajaban en casas de nobles y ricos y familias acomodadas que, incluso en caso de declive o pérdida de rentas, mantenían a los sirvientes hasta el último momento.⁶

Los herederos con título eran todavía muy importantes en los primeros años del siglo xx e incluso en la industrial y urbana Inglaterra todos los primeros ministros hasta 1902, excepto Benjamin Disraeli y William Gladstone, habían sido nobles. Entre 1886 y 1914, casi la mitad de los miembros del consejo de ministros eran aristócratas. Dominaban puestos esenciales en la administración y en las profesiones más cualificadas y compartían, con el resto de las elites políticas, de la administración y de los negocios, la educación en las mejores universidades inglesas, Oxford y Cambridge, y en los mejores colegios privados, especialmente Eton.

Precisamente por eso, por saber cómo retener el poder político en un país industrializado y llamado ya democrático, la aristocracia británica era admirada en otros países donde la nobleza tenía más rango de casta que de clase.⁷

Así era, sin duda, en Rusia, donde la burocracia imperial era una casta de elite que se encontraba muy por encima del resto de la sociedad y esa elite dominante procedía sobre todo de la vieja y rica aristocracia terrateniente, los Strogonov, Dogorukov, Sheremetev, poderosas dinastías que se habían mantenido en la cúspide del Estado ruso desde su gran expansión territorial en el siglo xv.

En Europa Central y del Este los cambios y reformas de esas décadas fueron controlados por la elite dominante del Antiguo Régimen. En esos países, la liberación de los siervos no modificó las formas de tenencia de la tierra. Como la elite nobiliaria había ayudado a reformar y transformar los viejos regímenes feudales en sistemas capitalistas, las grandes propiedades sobrevivieron y «proporcionaron una sólida base para conservar los poderes económicos y posiciones sociopolíticas de la nobleza terrateniente». En esas sociedades, las personas asociadas con el capitalismo, propietarios y ricos burgueses, ocuparon posiciones menos privilegiadas a causa de la persistencia de los rangos feudales y del principio de nacimiento.⁸

Pese al crecimiento de las clases medias, menos numeroso en la Europa del Este o del Sur que en Inglaterra y los países nórdicos, las desigualdades sociales eran profundas y muy visibles. La distancia entre esas buenas familias, que extendían sus raíces genealógicas por las monarquías e imperios de Europa, y la mayoría de la población pobre era sideral. La pobreza estaba conectada con las enfermedades, la baja esperanza de vida, el analfabetismo y la falta de expectativas sociales. La mayoría de los europeos morían en la misma posición social que habían nacido.

En Gran Bretaña, la sociedad más próspera de Europa, el 30 por ciento de la población vivía en la pobreza crónica cuando comenzó el siglo xx, e

incluso los sectores más afortunados de las clases trabajadoras sufrían largas jornadas de trabajo, con poca seguridad y sin servicios médicos o seguros de enfermedad.⁹

Quien más riqueza acumulaba en esos años finales del siglo XIX y comienzos del XX era la burguesía industrial y comercial, que comenzaba a competir en estilos de vida y mansiones de lujo con la nobleza de las cortes europeas del centro y este de Europa. A William Gladstone, primer ministro liberal británico, le impresionó el lujo que vio en un banquete en la residencia del banquero berlinés Gerson Bleichroeder y eso que Gladstone estaba bastante acostumbrado al esplendor de la vida social de la clase alta de Londres. La mansión estaba construida con mármol y oro, y entre sus múltiples salones había una galería para músicos «que tocaban a Wagner, y solo Wagner», y varias con obras de arte.¹⁰

Todas esas desigualdades eran especialmente acusadas entre las mujeres. Las diferencias eran sociales, económicas, culturales y políticas. Su esperanza de vida era menor, el analfabetismo más alto, carecían de independencia económica, las leyes legitimaban su subordinación a los hombres, y la tradición y las costumbres culturales limitaban su esfera de influencia al hogar. El Código Napoleónico, vigente en Francia y adaptado a otros países europeos, había reforzado durante todo el siglo XIX la tradicional autoridad del hombre, padre y marido, en la posesión de propiedades o en las decisiones en torno a la educación de los hijos.

En la mayoría de los países católicos, con España e Italia al frente de ellos, el divorcio estaba prohibido y las mujeres eran también las plebeyas en el mercado de trabajo, donde además el acoso y abuso sexual por parte de los jefes, capataces y sus propios compañeros trabajadores era el pan de cada día.

Las mujeres estaban excluidas de la política, del gobierno, de muchas instituciones educativas, profesiones y ocupaciones. Cuando comenzó el siglo XX todavía no habían conseguido el derecho al voto en ningún país europeo y, aunque pudieron votar en Finlandia (1906) y Noruega (1913) —antes lo habían hecho en Nueva Zelanda (1893) y Australia (1902)—, la barrera electoral no se rompió en Inglaterra, Alemania o en España hasta después de la Primera Guerra Mundial y en Francia o Italia hubo que esperar hasta el final de la Segunda.¹¹

Aunque muchos ciudadanos europeos tenían restringida la libertad para hablar su idioma o practicar su religión y sufrían notables discriminaciones por el género, la raza o la clase a la que pertenecían, esos grupos de privilegio y poder veían a Europa como «el mundo civilizado» y creían que

el final de ese camino de crecimiento económico y prosperidad, muy visible desde finales del siglo XIX, conduciría a la «europeización del mundo».

Porque Europa era a comienzos del siglo XX el centro del mundo, sus principales países se habían repartido Asia y África y, además de la industria y tecnología, tenían casi el monopolio de la fuerza militar moderna. Europa estaba en la edad del teléfono, del coche, de las ametralladoras y submarinos, con un optimismo y fe considerables en el racionalismo, la ciencia y el progreso, pero esos «buenos tiempos» estaban reservados para los propietarios, hombres blancos, cristianos y ricos.¹²

La democracia y la presencia de una cultura popular cívica, de respeto por la ley y de defensa de los derechos civiles, eran bienes escasos, presentes en algunos países como Francia y Gran Bretaña y ausentes en la mayor parte del resto de Europa. Tampoco los parlamentos gozaban de buena salud en países como Rusia, Italia, Alemania o España, donde, debido a la corrupción, el sufragio restringido y la intervención de los monarcas en los gobiernos, aparecían ante intelectuales radicales y socialistas como instrumentos de gestión pública al servicio de las clases dominantes.

Estaba emergiendo la «sociedad de masas», de sindicatos y partidos políticos que atraían a amplios sectores de las clases trabajadoras que, con sus organizaciones, movilizaciones, disturbios y huelgas, aparecieron en el escenario público y pidieron insistentemente que no se las excluyera del sistema político. Pero no todos creían en esa estrategia de reforma gradual del sistema liberal capitalista. Y frente al uso continuo del aparato represivo por parte de los Estados, las tendencias violentas y el terrorismo tuvieron también su protagonismo desde las dos últimas décadas del siglo XIX, estimulados primero por el populismo en Rusia y después por las corrientes del anarquismo que favorecieron «la propaganda por el hecho», un término que al principio significaba insurrección contra los opresores, el ejército y el capitalismo, más que el asesinato político.

Muerte al tirano

El primer laboratorio de ese terrorismo decimonónico, con notable continuidad en la primera década del siglo XX, fue Rusia. En su larga historia de oposición al zarismo, los revolucionarios rusos recurrieron frecuentemente al terrorismo. Los primeros grupos, con nombres como «La Voluntad del Pueblo» y «Tierra y Libertad», surgieron en los años sesenta y setenta del siglo XIX, con el nihilismo y el movimiento populista, y sus métodos adqui-

rieron una reputación internacional tras el asesinato del zar Alejandro II en marzo de 1881. Y pese a que la socialdemocracia consiguió abrirse camino en los años posteriores, rechazando precisamente el terrorismo, las bombas y los atentados alcanzaron su punto álgido en 1905-1907, tras la creación del Partido Social Revolucionario, y mantuvieron su atractivo hasta que la Primera Guerra Mundial y las revoluciones de 1917 posibilitaron la rápida transición del terrorismo individual al de masas.¹³

Ese modelo de terrorismo compartía características esenciales, con algunas similitudes y diferencias, con el que propagaron los anarquistas en otros países de Europa: los principales objetivos eran gobernadores, políticos y miembros de la policía; era un fenómeno urbano; la venganza contra los represores y explotadores, contra la violencia de la tiranía, era su principal legitimación; jóvenes y personas con acceso a estudios desempeñaron un papel importante teórico y organizativo; y un número sustancial de mujeres participaron en los atentados.

La imagen del «asesino virtuoso», encarnada en la ética del sacrificio por la causa, y el rechazo a derramar sangre «inocente» fueron bastante comunes en esos años de finales del siglo XIX y sería muy difícil de encontrar después en otros ejemplos de terrorismo.¹⁴

El 17 de febrero de 1905, Iván P. Kaliaev arrojó una potente bomba de nitroglicerina contra el carruaje del gran duque Sergei Alexandrovich, séptimo hijo de Alejandro II, que saltó por los aires y destrozó el cuerpo del tío del zar Nicolás II. Kaliaev podría haberlo matado dos días antes, según el plan previsto, a la salida de un concierto en el teatro Bolshoi, pero, como iban con él su mujer y dos de sus sobrinos, esperó mejor ocasión, a que estuviera solo, para el atentado. Kaliaev fue ejecutado unos días después y fue inmortalizado como «asesino puro» en la obra teatral de Albert Camus *Les Justes* (1949).

Los atentados terroristas dejaron miles de muertos entre 1905 y 1907, coincidiendo además con la primera gran revolución de la historia de Rusia y con la guerra contra Japón, y 782 personas fueron ejecutadas por el zarismo en 1908. La represión se hizo más eficaz, la policía se infiltró en los grupos terroristas y además mucha de esa violencia se desvinculó de los objetivos políticos iniciales —desestabilizar al sistema y proporcionar la chispa para la rebelión popular—, y derivó en violencia criminal, sostenida en robos de bancos y trenes para ganancia personal de quienes la practicaban. Hacia 1910 el terrorismo en Rusia estaba en retirada. El que le costó la vida al jefe de Gobierno Piotr Stolypin en septiembre de 1911 fue el último gran atentado de un ciclo de violencia que duró casi cuatro décadas.

Aquella represión, llevada a cabo por la Ojrana, la policía secreta del régimen zarista, caracterizada por sus crueles métodos y el uso de agentes provocadores reclutados en los bajos fondos, contribuyó a extender los poderes del Estado. La actividad terrorista coincidió, como en otros países, con un período de escaso avance de las instituciones representativas y declinó además por la modernización de los sistemas policiales de identificación y prevención y por la cooperación internacional que comenzó a ponerse en marcha después de la «Conferencia Internacional para la defensa de la sociedad contra los anarquistas», celebrada en Roma en noviembre-diciembre de 1898.¹⁵

Esa conferencia, a la que asistieron representantes de la mayor parte de los países de Europa —con la importante excepción de España—, fue convocada por el gobierno italiano como reacción al asesinato de la emperatriz Isabel unas semanas antes. En la propuesta final se rechazaba que el anarquismo fuera una doctrina política y se acordaron medidas amplias y enérgicas para su represión, castigo y eliminación.

El perfil del asesino de la emperatriz de Austria era muy diferente al de esa importante minoría de revolucionarios rusos que con sus prácticas de violencia política tuvo en jaque al Estado de un imperio de más de 120 millones de habitantes en las décadas anteriores a la Primera Guerra Mundial.

Luigi Lucheni había nacido en París en 1873, hijo de padre desconocido y de una criada italiana que le abandonó sin dejar rastro. Tras pasar por varios orfanatos, en la capital francesa y en Parma, fue confiado a unos padres adoptivos y a la edad de 9 años ya estaba trabajando en el ferrocarril entre Parma y Spezia. Unos años después, fue reclutado, participó en la guerra de Abisinia, en 1896, y tras finalizar su servicio militar, a finales del año siguiente, se instaló en Suiza, una república rodeada de monarquías, que se había convertido en refugio de conspiradores, revolucionarios y anarquistas de todas nacionalidades, que disfrutaban de cierta seguridad, sin acoso policial. Allí Lucheni entró en contacto con anarquistas italianos expatriados.¹⁶

A finales de agosto de 1898 la emperatriz Isabel viajó a Suiza, donde tras disfrutar de estancias en balnearios y diversas mansiones de la familia Rothschild, llegó a Ginebra el 9 de septiembre. Al día siguiente, en el trayecto desde el hotel Beau Rivage al muelle de Mont Blanc, antes de subir al barco de vapor, Lucheni le clavó un estilete en el pecho. Isabel cayó, logró recuperarse con la ayuda de su acompañante, la condesa Sztaray, pero tras subir al barco se desmayó y murió poco después en el hotel.

Lucheni, que eligió a la emperatriz como víctima cuando se enteró de

su presencia en Ginebra por la prensa, fue detenido y condenado a cadena perpetua. Él mismo pidió la pena de muerte, buscando la gloria como mártir revolucionario, pero no estaba entonces en vigor en ese cantón suizo y tras insistir en varias ocasiones en vano de que le trasladaran a Italia, sufrir torturas y castigos, se ahorcó con un cinturón en su celda en octubre de 1910.¹⁷

El anarquismo parecía de entrada una utopía derivada de la filosofía optimista de la Ilustración que mantuvo, como hijo del mismo tiempo que era, estrechas conexiones con las conspiraciones y sociedades secretas. Pero al mismo tiempo iba mucho más lejos de lo proyectado por el racionalismo liberal y el populismo, con su pretensión de abolir el Estado, colectivizar los medios de producción y sobre todo con su antipoliticismo, la verdadera seña de identidad del movimiento, el rasgo que marcó la ruptura con sus sucesivos compañeros de viaje, socialistas o, ya en el siglo xx, comunistas.

Como ideología política decimonónica bebía de dos corrientes doctrinales, el individualismo liberal y el comunitarismo societario, una dualidad muy difícil de equilibrar en la práctica pese a todas sus llamadas a la armonía natural.¹⁸

El anarquismo que triunfó en España en el siglo xx, estrechamente ya unido al sindicalismo revolucionario, fue el «comunitario», el «solidario», el que confiaba en las masas populares para llevar a buen puerto la revolución. Durante las primeras décadas de su gestación, sin embargo, coexistió con otro «individualista», más europeo y elitista, que despreciaba a las masas y ensalzaba a los individuales rebeldes, siguiendo a Stirner y Nietzsche.

Esa mezcla de anarquismos contagió su modelo político y organizativo. «Creo que hacen falta dos organizaciones, una abierta, amplia, funcionando a la luz del día; la otra secreta, de acción», escribía Piotr Kropotkin en 1881.¹⁹

Pero eso no significa, como se piensa a menudo, que el anarquismo saliera del cascarón matando. La verdad es que, tras veinte años de existencia de la Internacional en España, con cortos períodos de actividad legal y largas etapas de clandestinidad, pocos atentados había habido, lo que contradecía la opinión de las autoridades.

Todo cambió, sin embargo, en los años noventa, cuando se impuso la tendencia violenta, animada por los vientos que en el anarquismo europeo soplaban favorables a «la propaganda por el hecho», un intento desesperado del movimiento anarquista internacional de escapar al aislamiento. El terrorismo acompañó a la desorganización y a la clandestinidad de los anarquistas, floreció en años de decadencia de la organización obrera, de margina-

ción, provocado también por la brutalidad e intransigencia del poder, que alimentó los argumentos de los partidarios de la acción violenta, de usar algo más que la palabra o la escritura, de «poner la química al servicio de la revolución».²⁰

El terrorismo anarquista fue un fenómeno internacional que produjo fuera de España muchas más víctimas, y extranjeros eran algunos de los terroristas que se movieron por su territorio —como Michele Angiolillo, Joseph Thioulouze, Tomás Ascheri y Jean Girault—, aunque también en la sociedad española dejó su señal de muerte, con actos sonados como el atentado contra Martínez Campos y la bomba del Liceo, ambos en 1893; la bomba contra la cola de la procesión del Corpus en julio de 1896; y el asesinato de Cánovas del Castillo en agosto del año siguiente.

Muchos de esos atentados ocurrieron por venganza, represalias contra un poder que torturaba y condenaba a muerte a personas que nada tenían que ver con los asesinatos, que detenía indiscriminadamente a anarquistas, republicanos, librepensadores, sin garantías, reverdeciendo la leyenda de la «Inquisición española», haciendo pasar a la historia la fortaleza de Montjuich como el «castillo maldito», lugar de tortura y muerte.²¹

Y la venganza de los «mártires de Jerez» fue uno de los pretextos para las primeras bombas en Barcelona. El 8 de enero de 1892, casi diez años después de la Mano Negra, y en el mismo escenario, la «violencia campesina» volvió a aparecer. Unos centenares de campesinos armados con sus hoces intentaron liberar a sus compañeros presos en la cárcel. Como escribió Vicente Blasco Ibáñez, «miraban con ojos feroces a Jerez. El desquite de los pobres estaba próximo y la ciudad blanca y risueña, la ciudad de los ricos, con sus bodegas y sus millones, iba a arder, iluminando la noche con el esplendor de su ruina».

El asalto fracasó y sus protagonistas, que se apoderaron de las calles durante unas horas, mataron a dos transeúntes. La respuesta gubernamental fue dura, lo habitual en aquella época: cientos de detenidos, numerosas torturas y cinco ejecuciones, las de los supuestos «inspiradores» de la insurrección. Se cumplían así las palabras que el mismo Blasco Ibáñez ponía en boca del amo de su ficción, aunque tan cerca de cualquier amo real, don Pablo Dupont, cuando este se enteró de que los campesinos iban a entrar en Jerez: «Un poco de susto en el primer momento, y después, ¡pum, pum, pum!, el escarmiento que les hace falta, el presidio, y hasta su poquito de garrote, para que vuelvan a ser prudentes y nos dejen quietos una temporada».²²

Tanta represión y «sangre inocente» transformaron la retórica revolucionaria en «propaganda por el hecho». En otoño de 1893 comenzó la olea-

da más importante de atentados en España. Primero fue Paulino Pallás quien arrojó dos bombas contra el general Arsenio Martínez Campos cuando pasaba revista militar en la Gran Vía barcelonesa. Era el 24 de septiembre, festividad de la Merced. Martínez Campos, artífice de la Restauración, resultó levemente herido. Pallás se dejó prender, proclamando su autoría. Unos días después, el 6 de octubre, tras sentarse ante un consejo de guerra, fue ejecutado.

El 7 de noviembre, Santiago Salvador lo «vengó» arrojando dos bombas «Orsini» en el patio de butacas del Liceo, donde se inauguraba la temporada de ópera de Barcelona con *Guillermo Tell*. El resultado fue de 22 muertos, con escenas de pánico y fuerte conmoción en la ciudad. Se detuvo a un centenar de anarquistas, a quienes se torturó en Montjuich. Algunos murieron en la cárcel. Otros, como Martí Borrás, se suicidaron. Por medio de torturas la policía obtuvo cinco confesiones de culpabilidad, falsas porque el 2 de enero de 1894 fue detenido en Zaragoza Santiago Salvador, quien se declaró único autor del atentado. Salvador fingió arrepentirse y convertirse al catolicismo. De nada le sirvió. Lo ejecutaron, igual que a los otros cinco, lo cual muestra la «eficacia» de aquella brigada antianarquista que se había puesto en marcha tras la masacre.

A la brutal represión siguieron dos años de pausa en los atentados, hasta que el 7 de junio de 1896, el domingo siguiente al día del Corpus, otra potente bomba «Orsini» estalló en la cola de la procesión cuando pasaba por la calle Cambios Nuevos de Barcelona: 12 muertos y 44 heridos. La policía, pese a que nunca halló al verdadero autor —al parecer, el anarquista francés Girault, que huyó a América—, llenó las cárceles de anarquistas, con detenciones indiscriminadas de militantes ya detenidos en 1893, librepensadores y dirigentes republicanos. La campaña contra el «castillo maldito» arreció y en mayo de 1897 se ejecutó a cinco anarquistas acusados de ser los autores del atentado. Tres meses más tarde, Michele Angiolillo, anarquista italiano que había vivido en Barcelona, pasó la frontera procedente de Londres, llegó al balneario guipuzcoano de Santa Águeda y disparó contra el presidente de Gobierno, Cánovas del Castillo, que murió el 8 de agosto de 1897. Los servicios de seguridad españoles, que tenían informes franceses sobre la llegada de Angiolillo a España para cometer un magnicidio, demostraron una vez más su inutilidad. Angiolillo fue agarrotado en la cárcel de Vergara unos días después.²³

Lo de la ineficacia policial merece un comentario. En realidad, solo cogieron a quienes actuaron a cara descubierta como Pallás o Angiolillo. Por la bomba del Liceo ejecutaron a cinco personas que nada tenían que

ver. De los otro cinco fusilados por el atentado contra la procesión del Corpus, solo Tomás Ascheri, que había sido confidente policial, se declaró culpable. Antes de llegar a esas ejecuciones, la policía necesitó detener a cientos de anarquistas y republicanos, a quienes torturaban arrancándoles las uñas, retorciéndoles los genitales o aplicándoles hierros rusientes en el cuerpo.

A falta de una policía eficaz, ahí estaba el ejército, omnipresente en la política de seguridad y de orden público, beneficiado por la «utilización abusiva» del estado de guerra, por la persistente suspensión de las garantías constitucionales. Los atentados anarquistas más importantes de la época pasaron por manos militares y fueron también consejos de guerra donde se condenó a tanto inocente. En el que juzgó a los detenidos por la bomba de la calle Cambios Nuevos, celebrado en diciembre de 1896, el fiscal solicitó nada menos que 28 penas de muerte. No es extraño que lanzara aquella famosa declaración: «agobiado por el número, cierro los ojos a la razón».²⁴

El caso es que a fuerza de cerrar los ojos a la razón, de detener, torturar y ejecutar, de aprobar leyes de represión de terrorismo y de hacer levantar la leyenda del «castillo maldito», los atentados se acabaron. Y cesaron tras asesinar a Cánovas, al político que había construido el sistema político de la monarquía restaurada, como si eso significara ya, como había sucedido con el presidente Carnot en Francia tres años antes, que se había conseguido el máximo objetivo, que ya no había nadie por encima de él a quien matar, en un momento en que, con una reina regente, ni siquiera había rey.

La «propaganda por el hecho» era, con el cambio de siglo, una cosa del pasado. El terrorismo de la acción individual ligado al anarquismo desapareció con Cánovas. Apenas duró un lustro. Y solo se impuso, como se ha tratado de demostrar, tras la derrota y represión de los sucesivos proyectos legales en que los anarquistas habían confiado. Porque la intransigencia gubernamental y patronal en España ni siquiera admitía movimientos reivindicativos reformistas, lo cual explica también, aunque esa no sea la única causa, que los socialistas fueran durante tiempo una secta, o que los anarquistas acabaran salpicados con sangre inocente en vez de crear asociaciones obreras. No fue la violencia el rasgo constante del anarquismo en las tres primeras décadas de su existencia, pero cuando apareció lo hizo, o al menos así lo justificaban sus instigadores, como una violencia «revolucionaria» frente a la que emanaba de la sociedad burguesa y de sus tiranos.

Con Cánovas no solo desapareció ese terrorismo anarquista de la «propaganda por el hecho». Un año después de su asesinato, la crisis del 98 fue el primer golpe duro para el sistema que él forjó. Y aparecieron proyectos

regeneracionistas, los republicanos comenzaron a salir de las catacumbas, los motines populares aumentaron y las clases trabajadoras hallaron otros caminos de movilización. Más de treinta años habían tardado socialistas y anarquistas en ver la luz, en salir del aislamiento y de las consecuencias de las polémicas entre grupos rivales.

Había otros fenómenos que ocupaban mayor espacio y preocupaban más que el terrorismo: el republicanismo lerrouxista derrotaba a las candidaturas dinásticas con sonados éxitos electorales y las sociedades obreras catalanas encontraban en Solidaridad Obrera nuevas armas de lucha ya ensayadas por el sindicalismo revolucionario francés y que cristalizaban en 1910 en la CNT. Pero a la vez que se gestaba todo eso, Barcelona conoció en los inicios del siglo xx una nueva fase terrorista, de explosiones indiscriminadas, que le colgaron el nombre de «ciudad de las bombas», con características muy diferentes a la que se había conocido en la anterior década.

Entre 1904 y 1907 estallaron bombas en plazas, en calles, en mercados, en sitios de fácil colocación, atentados nunca reivindicados por los anarquistas, que los rechazaron y atribuyeron a la policía o a la «reacción». Terrorismo turbio, en cualquier caso, que no seleccionaba sus víctimas y que, excepto en algunos casos, no tenía objetivos políticos y pretendía más bien crear inquietud y disturbios.

Y como turbio que era, a ese terrorismo le acompañaron todo tipo de montajes policiales, detenciones de anarquistas cada vez que se oía un petardo y salida a la luz de rocambolescas invenciones e historias de confidentes. La palma se la llevó el caso de Joan Rull i Queraltó, un zapatero anarquista que, de supuesto terrorista, llegó a ser confidente del duque de Bivona, gobernador civil de Barcelona con el gobierno de Segismundo Moret en los primeros meses de 1906, quien le proporcionaba dinero a cambio de información sobre atentados y colocaciones de bombas. El gobernador que lo sustituyó, Francisco Manzano, se negó a dar más dinero a Rull y prescindió de sus servicios. Los incidentes con bombas aumentaron. Como pronto llegó otro gobernador, el conservador Ángel Ossorio y Gallardo, Rull fue a ofrecerle de nuevo su colaboración. Cada vez pedía más dinero: quinientas pesetas para evitar un nuevo atentado. Ossorio le mandó solo la mitad. Estallaron más bombas. En julio de 1907, la policía arrestó a Rull, a su hermano y a sus padres. En el juicio se comprobó que había hecho del terrorismo un negocio familiar, en el que incluso su señora madre depositaba algunas de las bombas. El garrote vil acabó con él el 8 de agosto de 1908. Al resto de la familia le cayeron varios años de prisión.²⁵

Además de bombas, hubo en esos años un intento de matar al presi-

dente del Gobierno, Antonio Maura, en 1904, y dos atentados contra el nuevo rey, Alfonso XIII, en 1905 y 1906. El primer tiranicida frustrado, Joaquín Miguel Artal, también resultó ser un tipo curioso. Joven y tímido, con «aspecto de estudiante u obrero aseado», como lo describía la prensa de la época, agredió a Maura con un cuchillo al grito de «¡Viva la anarquía!», cuando el presidente salía de la catedral de Barcelona, a donde había ido a acompañar al rey. Maura resultó levemente herido en el pecho. Artal fue condenado a 17 años de cárcel.

Los atentados contra Alfonso XIII habían sido planeados en Barcelona y formaban parte de un cuidadoso complot donde había republicanos y anarquistas. En París, estaba entonces Pedro Vallina, un anarquista que se dedicaba a redactar hojas contra «L'Espagne Inquisitoriale», en las que recordaba la Mano Negra, Jerez, Montjuich, se elogiaba a Artal, aunque hubiera fallado, enseñaba a elaborar explosivos y llamaba a los «hombres de acción» a actuar contra todos los tiranos, desde Alfonso XIII al sultán de Turquía. Junto con Carlos Malato y otros republicanos, entre quienes se encontraba Alejandro Lerroux, preparó un atentado contra el monarca español que iba a visitar París en la primavera de 1905. Las autoridades francesas detuvieron a Vallina y a Malato pero, aun así, el 31 de mayo de 1905 una bomba estalló bajo el coche que llevaba al rey al lado del presidente Émile Loubet. Solo murió uno de los caballos, y el grupo revolucionario salió absuelto del juicio.

Justo un año después, el día de la boda de Alfonso XIII con la princesa inglesa Victoria Eugenia de Battenberg, Mateo Morral arrojó, desde el tercer piso del número 88 de la calle Mayor de Madrid, una bomba envuelta en un ramo de flores cuando pasaba el carruaje real. Los reyes salieron ilesos pero el artefacto dejó allí 23 muertos y un centenar de heridos. Morral huyó y en Torrejón de Ardoz, tras matar a un guardia jurado que intentó detenerlo, se suicidó. El atentado tuvo relevancia porque, además de la escabechina que dejó, había implicados personajes que eran ya o se iban a hacer muy famosos: Nicolás Estévanez, Francisco Ferrer i Guardia y Alejandro Lerroux.²⁶

Joaquín Romero Maura sostiene que la idea de matar al rey era «el doctorado de los propagandistas por el hecho», pero no parece que los anarquistas echaran mucha carne en ese asador, dedicados como estaban a otros menesteres. A los anarquistas, el terrorismo de finales del siglo XIX les había hecho mucho daño, sumergiéndolos en un período de desorganización, de escasa presencia entre las sociedades obreras, aunque, si se rastrean otros síntomas de vida, se encuentran ateneos obreros, cooperativas, periódicos,

escuelas laicas, y diferentes manifestaciones de una cultura popular, antioligárquica y anticlerical, donde el republicanismo y el obrerismo —anarquista o socialista— se daban la mano.

Dicho de otra forma, la tradición anarquista, la federal, la de sentimientos anticlericales y anticontralistas bullían en la Cataluña urbana de la primera década del siglo xx. Y ahí se manifestó el catalanismo político. Y nació en 1907 Solidaridad Obrera, por iniciativa socialista, aunque con fuerte inspiración anarquista, precedente de la CNT. Y emergió la personalidad de Alejandro Lerroux, que hizo votar republicano a los estratos obreros y ejerció de anticatalanista en el corazón de Cataluña.

El terrorismo anarquista, «la propaganda por el hecho», se basaba en la esperanza de conseguir fines revolucionarios, convirtiendo un ataque específico contra un tirano u opresor en la mecha para una explosión de reacciones de protesta social, represión, venganzas y señal decisiva para la acción de masas. Los atentados eran eficaces, pensaban sus instigadores, porque tenían un fuerte impacto en la opinión pública.²⁷

Y aunque el número de víctimas fue relativamente pequeño, alrededor de cien entre todos los países, la relevancia de algunos de ellos —una emperatriz, un rey, jefes de Estado y presidentes de Gobierno— incrementaba la repercusión de ese tipo de violencia, exagerada por el sensacionalismo de la prensa. La historia del anarquismo quedó asociada a la bomba y al revólver, a la siniestra figura del hombre de la capa negra con el cartucho de dinamita. La daga, la pistola y la dinamita.²⁸

No era una conspiración internacional organizada, pero ese terrorismo se consideraba en la mayoría de los países un peligro mayor que los conflictos sociales, que intentaban taparse, a la vez que se desviaba la atención hacia los atentados, ocultando la represión estatal. Siguiendo los estudios del criminólogo italiano Cesare Lombroso, que aplicó las técnicas de la antropología criminal al anarquismo, los integrantes de ese movimiento eran locos y suicidas que usaban tatuajes, como los criminales, y carecían «de sentido moral, falta por la que les parece sencillísimo el robo, el asesinato y todos los crímenes que a los demás parecen horribles». Como se podía leer en la prensa alemana tras los asesinatos de la emperatriz Isabel y el presidente McKinley, «una minoría muy pequeña de fanáticos sin escrúpulos aterrorizan a toda la raza humana. El peligro para todos los países es grande y urgente».²⁹

Aunque para una parte de la prensa y la imaginación popular anarquismo y terrorismo eran sinónimos, solo una minoría de anarquistas participaron en atentados o actos violentos y frente a la imagen del criminal, la pren-

sa anarquista y quienes defendían y practicaban la «propaganda por el hecho» opusieron la del mártir, altruista y dispuesto al sacrificio.

Luigi Lucheni, como hemos visto, quería ser ejecutado como prueba de su acto sublime, matar a una emperatriz. Después de que una persona sin identificar hiciera explosión de una bomba en la Haymarket Square de Chicago, en mayo de 1886, varios anarquistas fueron detenidos. Albert Parsons escapó al acoso policial, pero se entregó después a la justicia para compartir la suerte de sus compañeros y fue ejecutado, junto con cuatro de ellos, negándose a solicitar el indulto. Los «mártires de Chicago» murieron en la horca, protestando contra la pena de muerte y acusando al sistema capitalista de provocar la miseria y la injusticia.

Con el nacimiento de la CNT en 1910, el anarquismo español transitó a formas más disciplinadas, convirtiéndose en un movimiento de masas en los años de la Primera Guerra Mundial, justo cuando, con la excepción de Argentina, había quedado reducido a una ideología política marginal en el resto del mundo. El discurso ritual de la clandestinidad y de la «subcultura» anarquista dio paso al de los lenguajes de clase. Y el terrorismo de las bombas se esfumó, como antes que él se había esfumado ya el asesinato individual de la «propaganda por el hecho», aunque el atentado protagonizado por Manuel Pardiñas, que costó la vida en Madrid al presidente de Gobierno José Canalejas en noviembre de 1912, tenía todavía sabor de terrorismo decimonónico. Solo una bomba explotó en Barcelona en 1910, y ninguna en los cinco años siguientes. La violencia que afloró después, ya al final de esa década, mostraba otra cara y se desarrolló bajo circunstancias muy diferentes, bajo la égida del sindicalismo revolucionario.

Dadas las connotaciones negativas del término, la mayor parte de los movimientos sociales que emergieron del socialismo y anarquismo en la segunda mitad del siglo XIX rechazaron la etiqueta de terroristas que el poder solía colgarles. La violencia terrorista apareció también en la lucha por obtener independencia o autonomía política de las minorías nacionalistas en los Balcanes y en el imperio otomano. Se trataba, en la mayoría de los casos, de pequeños grupos de intelectuales, con escasa base social entre obreros y campesinos, que supieron movilizar, sin embargo, en algunos momentos a amplios sectores de la población.³⁰

Los movimientos sociales más importantes de Europa se dividieron entre quienes optaban por los medios legales y la oposición parlamentaria y los que seguían defendiendo la vía insurreccional y, en los casos más extremos, la violencia terrorista. La vía «reformista» fue muy clara en Alemania, con el crecimiento del Partido Social Demócrata y su conversión en una

organización de masas, pero incluso en Rusia y en España, los revolucionarios y anarquistas estuvieron muchas veces dispuestos a aprovechar las escasas vías que el sistema y el Estado ofrecían.

Porque la historia de esa violencia terrorista no puede explicarse sin su relación y confrontación con el Estado. El terrorismo no disminuyó el poder del Estado, que concentró cada vez más funciones y reforzó en casi todos los países su monopolio de la violencia con la creación de nuevas fuerzas de policía y el reclutamiento en los ejércitos. En esos últimos años de finales del siglo XIX y comienzos del XX, casi todas las potencias europeas habían establecido un período de servicio militar obligatorio, que servía también para disciplinar e instruir a cientos de miles de jóvenes varones en los valores patrióticos, militares y en la obediencia al orden y a la autoridad.

Más allá del terrorismo anarquista o revolucionario ruso, los asesinatos políticos, para cambiar dinastías o eliminar a pretendientes al poder, con fines también nacionalistas, de unión de pueblos de la misma raza o religión, fueron comunes en Bulgaria y Serbia desde el siglo XIX. Al día siguiente del asesinato del rey Alejandro I, *The Times* describía a Serbia como «la tierra de asesinatos, abdicaciones, pronunciamientos [sic] y golpes de Estado».

En la noche del 10 al 11 de junio de 1903, un grupo de oficiales del ejército serbio, liderados por el capitán Dragutin Dimitrijevic, asaltó el palacio real de Belgrado y asesinó al rey y a su esposa Draga Masin. El asesinato significó el fin la casa de Obrenovic, que había reinado desde 1815 a 1842, y de nuevo a partir de 1858, y dio paso a la dinastía Karadordevic con el rey Pedro I, que reinó en Serbia, y después en Yugoslavia, hasta que el rey Pedro II fue depuesto y enviado al exilio en noviembre de 1945.³¹

Otros reyes fueron asesinados en esos primeros años del siglo XX —Carlos I de Portugal en 1908 y Jorge I de Grecia en 1913—, antes de que el atentado que costó la vida al archiduque Francisco Fernando y a su mujer, Sofía Chotek, provocara el inicio de la Primera Guerra Mundial. Con esa guerra, con las revoluciones que la acompañaron y con los dos grandes movimientos y regímenes políticos que de ella resultaron, el comunismo y el fascismo, la violencia individual dio paso de forma definitiva a la de masas, a la eliminación de grupos definidos por la clase, la raza, la religión o la nación. Antes de que eso ocurriera, varias y diversas insurrecciones, urbanas y campesinas, desafiaron a la autoridad y a ese mundo de privilegio y poder que parecía intocable, que pudo sobrevivir todavía durante un tiempo gracias a la superioridad decisiva y control absoluto de sus fuerzas armadas sobre los revolucionarios.

El desafío al orden

Contemplado desde Europa Occidental, especialmente desde Gran Bretaña, Francia o Alemania, el crecimiento de los sindicatos y, en menor medida, de los partidos políticos socialistas marcó la historia de las clases trabajadoras en los últimos años del siglo XIX y comienzos del XX, hasta 1914. Eso, sin embargo, no es lo que ocurrió en otros países de Europa Central y del Este y tampoco la fotografía sería completa si no se tuvieran en cuenta además importantes movimientos sociales e insurrecciones que no entraban en la categoría de protesta obrera organizada.³²

El desarrollo del capitalismo y la industrialización provocaron, sin duda, cambios en la estructura de la protesta social, donde la huelga y los conflictos entre patronos y obreros fueron gradualmente sustituyendo al motín. Esa protesta industrial moderna tenía como objetivo solucionar las penosas condiciones que padecían en las fábricas, talleres y fuera de ellos los trabajadores. Y para ello era fundamental la organización en sociedades de apoyo/socorro mutuo, resistencia, sindicatos y partidos políticos independientes de los conservadores y liberales.

Aunque las revoluciones de 1848 y la insurrección en París en 1871, y antes la revolución francesa de 1789, habían configurado algunos de los modelos y símbolos revolucionarios más potentes —incluidos los himnos, las banderas y las representaciones artísticas—, a comienzos del siglo XX las revoluciones no tenían un buen récord de triunfos. Y algunas de sus principales manifestaciones, como los disturbios, las huelgas o las insurrecciones, habían sido siempre controladas y sofocadas por unos Estados cada vez más eficaces —y violentos, si era necesario— en la represión.

Las barricadas y la vía insurreccional habían desaparecido en algunos países y, aunque las ideas socialistas o anarquistas alarmaban a los gobiernos y a la gente de orden, su impacto en la práctica era menor y había una notable diferencia entre la amenaza percibida y la real. Los socialistas mantenían la retórica revolucionaria, mientras que aspiraban a ocupar asientos en los parlamentos nacionales, pero el sufragio universal masculino, que sustituyó gradualmente al censitario, se había establecido solo en unos pocos países, normalmente como concesiones de los liberales para mitigar las aspiraciones de los socialistas al poder.³³

Hasta la Primera Guerra Mundial solo una pequeña parte de los trabajadores europeos estaban afiliados a organizaciones políticas o sindicales socialistas y, en términos electorales, únicamente en Alemania se había consolidado un influyente partido socialista de masas. Los desafíos más im-

portantes a la autoridad, al sistema de propiedad y al orden imperial antes de 1914 tuvieron lugar en Rusia, el país que, teniendo una clase obrera industrial poco numerosa comparada con su ingente campesinado, paradigma del atraso para muchos observadores de la época, se convirtió a partir de 1917 en faro de todos los revolucionarios europeos, con la importante excepción de los anarquistas españoles.

Rusia era una sociedad campesina en tiempos de Alejandro II, el zar que decretó en 1861 la abolición de la servidumbre, y continuaba siéndolo a comienzos del siglo xx bajo el reinado de su nieto Nicolás. La población del imperio se aproximaba entonces a 130 millones y no existía allí ni una poderosa burguesía industrial, o una clase media que pudiera constituir la base social para una democracia liberal, ni un proletariado que pudiera articular a través de sindicatos y partidos políticos una alternativa revolucionaria al régimen autocrático.

En realidad, la mayoría de los disturbios sociales del período anterior a la guerra mundial reflejaban todavía las formas de protesta preindustrial, motines e insurrecciones, casi desaparecidas en los países europeos más avanzados, mientras que las huelgas, que requerían una mayor organización y disciplina, se extendían únicamente por las industrias modernas localizadas en Ucrania, los Urales y San Petersburgo. La legislación zarista prohibía a los trabajadores organizarse, declaraba ilegales las huelgas y condenaba a la mayoría de esos obreros fabriles a largas jornadas laborales y a vivir en condiciones calamitosas, con el alcoholismo muy extendido y con epidemias, como el cólera, que castigaba a toda esa población empobrecida cada pocos años.

Aunque Nicolás llegó al trono en un momento de modernización y cambio, la elite gobernante procedía predominantemente de la aristocracia terrateniente tradicional. Era un sistema patrimonial y el mismo Nicolás lo describió con una metáfora más ilustrativa que la mejor definición: «Yo concibo a Rusia como un latifundio en el que el propietario es el Zar, el administrador la nobleza, y los trabajadores son los campesinos».³⁴

El grandioso imperio ruso parecía fuerte, pero, además de las debilidades ya señaladas, era también un continente, con enemigos por todas partes. A la amenaza de sus vecinos y rivales de siempre, Prusia/Alemania, Austria/Hungría y Turquía, un nuevo y potente desafío surgió en el este, Japón. Y cuando ese país asiático puso en marcha a comienzos del siglo xx sus planes expansionistas, apuntó como objetivo a las lejanas posesiones de Rusia en el extremo oriente. En enero de 1904 comenzó una guerra entre los dos países por el dominio de Manchuria y Corea. La guerra llevaría a la primera revolución a la que tuvo que hacer frente Nicolás, y aunque sobre-

viviría a sus consecuencias, fue un ensayo de lo que iba a pasar, con magnitud incomparable, entre 1914 y 1917.

Cuando la guerra comenzó, como consecuencia del ataque japonés a la flota rusa en Port Arthur (Manchuria), hubo una oleada de patriotismo encabezada por círculos liberales y por la mayoría de los *zemstvos* provinciales —consejos elegidos por los campesinos, aunque dominados por los nobles—, en los que tuvo un papel destacado el príncipe Lvov. Pero la guerra fue larga, casi un año y medio, combatida a más de nueve mil kilómetros de la capital, y con derrotas estrepitosas que socavaron pronto el fervor patriótico y que fueron atribuidas a la incompetencia del gobierno y del comandante en jefe, el general Mijaíl Alekséyev.

La debacle militar precipitó una crisis política y social, que casi llegó a una confrontación total de la sociedad con el régimen. El 9 de enero de 1905 una manifestación masiva, de 150.000 personas, que incluía a muchas mujeres y niños, confluyó desde diferentes barrios de San Petersburgo en frente del palacio de Invierno. Las tropas concentradas para evitar que llegaran allí abrieron fuego, causando unos doscientos muertos y ochocientos heridos. Los trabajadores levantaron barricadas y algunos grupos asaltaron armerías y tiendas de licor. Nadie dirigía aquella revuelta, porque los partidos socialistas eran todavía débiles y sus principales líderes estaban en el exilio, pero el «Domingo Sangriento» tuvo un profundo efecto en la conciencia de mucha gente.

En las semanas y meses siguientes, hubo huelgas y se creó el primer soviét —consejo, en ruso— de la historia en la capital, dirigido por León Trotski. En octubre, el zar, que había pasado aquellos días trágicos en su residencia en Tsárskoye Seló, llenando sus diarios de apuntes sobre el tiempo y la caza de pájaros, fue presionado para que firmara un manifiesto, redactado por su primer ministro, el conde Serguéi Witte, en el que garantizara libertades civiles y poderes legislativos a una Duma elegida por sufragio democrático.

Esa buena declaración de intenciones del zar, sin embargo, no calmó las huelgas y conflictos en el campo, que se extendieron durante todo el año por diferentes partes del imperio y con especial intensidad en las zonas fronterizas no rusas de Letonia, Polonia, Finlandia, las provincias del Báltico y las que iban más allá del Cáucaso, Georgia, Armenia y Azerbaiyán.

El ejército fue utilizado en cientos de ocasiones para reprimir brutalmente revueltas e insurrecciones campesinas que siempre reclamaban una justa distribución de la tierra. Los motines alcanzaron a las fuerzas armadas, como el de junio en el acorazado *Potemkin*, que ocasionó, tras apode-

rarse los amotinados del buque y conducirlo a Odesa, donde una huelga de obreros mantenía a la ciudad en estado de sitio, una matanza de dos mil personas, con más de tres mil heridos.

Todos esos conflictos fueron acompañados también de violencia popular, asaltos a propiedades y vandalismo, de odio a los ricos, aristócratas y a la autoridad, formas de expresión de algunos sectores militantes y de las clases populares que saldrían a la superficie con mucha más virulencia en 1917 y que constituyeron siempre un problema para los dirigentes que querían mantener el control de la revolución.

Las protestas, insurrecciones y revueltas no derivaron en una revolución triunfante en 1905 porque, aunque afectaron a las fuerzas armadas, fueron todavía escasas y limitadas, y la caballería, los cosacos y los regimientos del frente continuaron obedeciendo órdenes. Los reclutamientos, al contrario de lo que sucedería en los años de la Primera Guerra Mundial, entre 1914 y 1917, tuvieron lugar en ciudades lejanas, evitando el riesgo de una comunidad de intereses entre los soldados y sus poblaciones de origen.

Sin embargo, el hecho de que el ejército se utilizara tanto en la represión de los conflictos, en el campo y en la ciudad, comenzaba a tener notables efectos en la disciplina. Como señala Allan K. Wildman, en su estudio del declive del ejército imperial ruso, desde que se estableció el servicio militar obligatorio, la composición social del ejército cambió, reflejo de la sociedad, con una mayoría de campesinos maltratados muy a menudo por la tradicional casta de oficiales. En muchas de esas huelgas y revueltas de 1905 comenzaron ya a participar además ex soldados que exhortaban a las tropas a unirse a ellos.³⁵

Cuando la marea revolucionaria cedió, los terratenientes reclamaron represión y restablecimiento del orden, contrataron a grupos armados para defender sus propiedades y crearon asociaciones patronales. Surgieron también grupos ultraderechistas paramilitares, como las «Centurias Negras», organizados en torno a la Unión del Pueblo Ruso, que se enfrentaron a los revolucionarios en las calles, se manifestaban con estandartes patrióticos y retratos del zar y lanzaron pogromos contra los judíos en muchas ciudades. A finales de 1906 tenían más de 300.000 miembros, muchos de ellos reclutados en las estratos bajos obreros y campesinos, de funcionarios y policías, y a los que en sus acciones más violentas se les juntaban criminales comunes. En perspectiva histórica comparada, fueron el más claro precedente de los movimientos fascistas de los años veinte y treinta.³⁶

La revolución de 1905 fue, en definitiva, un momento crucial en la historia del conflicto del siglo xx en Rusia y aunque no pudo conseguir su

principal objetivo, el desmantelamiento del sistema autocrático, el viejo orden se tambaleó y algunos cambios institucionales sobrevivieron tras tres años de conflictos, protestas sociales y represión.

Como demostró Abraham Ascher en su exhaustiva investigación, ningún grupo ni región geográfica quedó al margen de los disturbios. La revolución afectó a varias ciudades, al campo, a las áreas periféricas del imperio, al ejército y a la marina. Y los movimientos sociales que desafiaron a la autoridad representaban a casi todos los sectores de la sociedad: liberales de las clases medias y propietarias, trabajadores industriales, campesinos y minorías nacionales. El zarismo pudo sobrevivir porque los desórdenes no ocurrieron de forma simultánea y porque el Estado mantuvo la lealtad de la mayor parte de las fuerzas armadas y, por lo tanto, el control de los medios de represión.³⁷

En ese mismo año en el que el imperio ruso se encontraba en medio de aquel terremoto político y social, el rey de Rumanía, Carol I, proclamaba orgulloso: «Rumanía es el único país en el que reinan la paz y el orden, mientras que en el resto de lugares que nos rodean hay nubes de tormenta amenazantes (...). Europa debería darnos las gracias por gobernar este país con precaución y sabiduría y mantener las pasiones controladas».³⁸

El monarca tenía motivos para elogiar la estabilidad de Rumanía, un Estado joven que había ganado su independencia en 1878 del imperio otomano, porque los otros Estados que habían nacido en esa parte periférica del vasto imperio —Grecia, Bulgaria y Serbia— estaban siempre inmersos en convulsiones sociales y violencia política.

Había signos de modernización, de crecimiento industrial y agrario, pero bajo su fachada liberal constitucional y parlamentaria existía un notable clientelismo político y el rey Carol I nombraba al jefe de Gobierno, que convocaba elecciones que siempre ganaba el partido en el poder. Dos partidos dominaban ese juego, el conservador, que representaba los intereses de los grandes terratenientes, y el liberal, de pequeños propietarios y clases medias. El voto estaba restringido a la minoría rica, y los campesinos, la mayoría de la población, no tenían ninguna representación política.

Aunque el campesinado había sido emancipado en 1864, con alguna redistribución de la tierra en lotes, la tenencia de la tierra en Rumanía estaba dominada por grandes terratenientes que subarrendaban la propiedad a intermediarios que sacaban beneficios de la explotación de los campesinos. Una buena parte de esos arrendatarios eran «extranjeros» —griegos, armenios, pero sobre todo judíos—, «a quienes se les asociaba con los aspectos negativos del capitalismo incipiente».³⁹

El 8 de febrero de 1907, los campesinos de Flamanzi, una comuna de Botosani, en el norte de Rumanía, se rebelaron contra uno de los terratenientes, el príncipe D. M. Sturdza, contra las familias judías que monopolizaban el mercado de las rentas y contra las autoridades locales que los mantenían a raya. La cosecha del año anterior había sido una de las peores en décadas y los campesinos comenzaron a protestar contra las opresivas condiciones de trabajo y contra las promesas incluidas de mejorar los contratos de arrendamientos. Unas semanas después, campesinos de todo el país, de norte a sur, se habían sumado a la rebelión, con numerosas destrucciones de propiedad y una extendida amenaza de desestabilizar el sistema.⁴⁰

El ejército movilizó a los reservistas y, en el sur, grupos de campesinos se organizaron en formaciones paramilitares. Como el gobierno ordenó poner fin al conflicto con todos los medios necesarios, incluida la artillería pesada, los asaltos a los pueblos que más resistían y las ejecuciones sin juicio fueron comunes. El gobierno dio la cifra de 2.000 muertos, pero las investigaciones más recientes la elevan a 11.000.⁴¹

Al uso de la violencia, primero por parte de los campesinos rebeldes y después de forma mucho más brutal por las autoridades y el ejército, se añadió el antisemitismo, que funcionaba en Rumanía, al igual que en otras partes del este de Europa, especialmente en Rusia, como «cortina de humo» para desviar la atención de las causas reales de los conflictos. Las elites terratenientes hicieron circular rumores de que había una gran conspiración judía para derribar al joven reino de Rumanía, una forma de proteger sus intereses y propiedades y estimular la xenofobia en un territorio fronterizo con los imperios austrohúngaro y ruso y donde coexistían rumanos, ucranianos, húngaros, austriacos, búlgaros, judíos y gitanos.⁴²

Los antagonismos de clase y desigualdades sociales, la explotación del campesinado, la violencia política —incluidos los asesinatos de monarcas—, el antisemitismo, la corrupción y la violencia de los Estados en la represión de los conflictos e insurrecciones mostraban la enorme distancia que en esos países de Europa del Este había entre las elites políticas y económicas y la gente común. Esa fotografía, muy bien documentada, se sale del marco de las narraciones originadas en los países occidentales, de esos supuestos *good times* en los que el continente vivía antes de que todo se derrumbara en 1914.

España, que no estaba en el este, también aportó algo a esa historia de corrupción sistemática, campesinado explotado, conflictos y violencia del Estado. Y allí ocurrió el último ejemplo de insurrección antes del estallido de la Primera Guerra Mundial, aunque el principal escenario no fue el

campo sino Barcelona, la ciudad donde los ateneos obreros, las escuelas laicas, el republicanismo y las organizaciones sindicales anarquistas estaban sustituyendo la memoria de las bombas y los atentados terroristas. Todo eso y mucho más confluyó en la famosa Semana Trágica.⁴³

La chispa que hizo estallar el conflicto poco tuvo que ver de entrada con ese obrerismo emergente o con los conflictos políticos en Cataluña. Comenzó como consecuencia de las presiones económicas y militares para incrementar la presencia española en Marruecos. Antonio Maura, presidente del Gobierno, aprovechó un ataque de las cabilas rifeñas en la primavera de 1909 para organizar una fuerza expedicionaria de castigo. Los reservistas fueron llamados a filas el 11 de julio de 1909, eligiendo Barcelona como puerto de embarque, con todo un ceremonial que, en palabras de Joan Connelly Ullman, parecía calculado para «excitar a las masas»: las tropas recorrían los barrios populares, sin que nadie hiciera «ningún gesto conciliatorio hacia el reservista ni hacia su familia, abandonada sin medios de subsistencia». En vez de eso, «los oficiales pronunciaban discursos patrióticos mientras las damas de la alta sociedad, cuyos hijos podían pagar las 1.500 pesetas necesarias para quedar exentos del servicio militar, distribuían medallas religiosas».⁴⁴

La tensión creció de tono el domingo 18 de julio, cuando las tropas se dirigieron al muelle recorriendo el centro de la ciudad, a una hora en que había mucha gente paseando por las calles. La multitud rodeó a los soldados, «que pronto rompieron la formación para caminar del brazo con sus parientes o amigos». Ya en el muelle, algunos de los soldados arrojaron las medallas al agua, mientras en la multitud comenzaban a gritar: «Tirad vuestros fusiles. Que vayan los ricos; o todos o ninguno. Que vayan los frailes».⁴⁵

Un comité obrero decidió la huelga general, que comenzó en Barcelona el lunes 26. La decisión partió de Solidaridad Obrera y en el acuerdo intervinieron el anarquista Tomás Herrero y el socialista Fabra Ribas. La huelga general se extendió «como una traca», según dijo el gobernador civil de la provincia Ossorio y Gallardo, triunfó en varias ciudades catalanas y los enfrentamientos violentos se extendieron al menos por 19 provincias. El capitán general, Luis de Santiago, proclamó el estado de guerra. Ya en la noche del lunes al martes ardieron los dos primeros edificios religiosos, algo que a partir de ese momento caracterizaría a aquellas jornadas: varias decenas de iglesias, conventos, escuelas y residencias religiosas fueron pasto de las llamas; además, se profanaron tumbas, aunque no hubo víctimas entre el clero.

El jueves 29 llegaron tropas desde Valencia y Zaragoza, que reconquis-

taron la ciudad, con bastantes resistencias en los barrios obreros, donde incluso fue necesario utilizar cañones en el asalto. El lunes 2 de agosto todo se había acabado. Hubo alrededor de 2.000 detenidos, de los cuales 600 serían condenados, 59 a cadena perpetua y 17 a muerte. Solo se ejecutó a cinco. El primero que cayó fusilado, José Miguel Baró, era el único que tenía algo que ver con la dirección de la insurrección popular. El último en morir ante el piquete de ejecución fue Francisco Ferrer i Guardia, el 13 de octubre, creador de la Escuela Moderna, considerado como «autor y jefe de la rebelión» por un tribunal militar carente de las mínimas garantías legales.

El fusilamiento de Ferrer, «el mártir de Montjuich», como lo llamó Antonio Fabra Rivas, un suceso de impacto internacional, fue una venganza en toda regla, que castigaba a un teórico revolucionario que había desafiado el control eclesiástico de la enseñanza y no tanto a un dirigente anarquista de la revuelta popular, que nunca lo había sido.

Como hemos visto en este capítulo, la modernización de Europa fue acompañada de enormes sufrimientos y trastornos para amplios sectores de su población. Mientras que en Occidente, «la creciente rivalidad entre los diferentes Estados por los recursos coloniales condujo a la militarización y a una carrera de armamento sin precedentes», en el Este la tardía y rápida expansión del capitalismo en los últimos años del siglo XIX y comienzos del XX abrió importantes fracturas que dejaron a las minorías religiosas y étnicas vulnerables.⁴⁶

La relevancia que adquirieron en algunos países europeos el racismo y el etnonacionalismo, la expulsión y eliminación de minorías étnicas, y sobre todo la violencia que acompañó a las guerras coloniales y a las de los Balcanes (1912-1913), pusieron la semilla de esa «guerra de treinta años» que duró de 1914 a 1945.